

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN

NÚMERO 685/2025

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte.: 141/2025

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato servicios denominado: *“Formación en la aplicación de la herramienta de valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección: Valora-Madrid”* con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NEXTGENERATION EU” a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad se efectuará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, al amparo de los previsto en los artículos 131, 146.2 y 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

Corresponden a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, con arreglo a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, las competencias relativas a la protección de la infancia y la adolescencia y fomento de la natalidad y el apoyo a la familia, la maternidad y de la paternidad y, en particular, entre otras, el impulso de políticas sociales en relación con la infancia y la familia, especialmente las referidas a su protección cuando se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, necesidad o de vulnerabilidad social, desde criterios de igualdad, solidaridad y defensa del interés superior del menor, en colaboración, en su caso, con las administraciones locales y con entidades privadas, así como la coordinación territorial de la ejecución de los servicios y programas que se desarrollen en esta materia, la coordinación con los servicios sociales de atención primaria, en materia de apoyo y protección de la infancia y adolescencia, el desarrollo de acciones informativas, educativas, divulgativas o de cualquier otra índole dirigidas a un mejor conocimiento de la situación y necesidades de la infancia y la adolescencia y la promoción de acciones de formación permanente para profesionales que trabajen con menores, adolescentes y familias.

Las reformas operadas a través de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia han tenido un hondo calado en las instituciones de protección a la infancia y la adolescencia, a la vez que han aparejado un notable cambio en la regulación de la desprotección de menores, en general, y de la situación de riesgo, en particular dándole un mayor detalle, así como en las herramientas formales a emplear por las Entidades Públicas para su valoración y declaración.

La actual redacción del artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) recoge la siguiente definición de la situación de riesgo: “ Se

considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar (...).

La situación de riesgo consiste en una situación de cualquier índole que perjudique al desarrollo personal o social del niño, niña o adolescente, siempre que la acción protectora de la Administración no requiera la asunción de la tutela por ministerio de la ley.

Se trata de una situación de desprotección efectiva, no eventual o potencial, pues la ley dice que la misma “perjudica” al niño, lo que justifica que exista una actuación protectora.

Dentro de la inevitable indefinición del concepto, dada la heterogeneidad de situaciones que se pretenden abordar, la ley concreta algunos indicadores de riesgo, lo que resulta singularmente útil dado que la actuación administrativa en estos casos se basa en datos probabilísticos.

Es preciso conocer qué situaciones ponen en funcionamiento la intervención de las Administraciones Públicas en esta materia, en aras al cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.

Por otro lado, las concretas medidas que se adoptarán en situaciones de riesgo no son especificadas en la Ley. La heterogeneidad de situaciones y circunstancias comprendidas dentro del concepto de situación de riesgo requieren una intervención adaptada e individualizada para cada caso y se orientará a, por un lado, disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la vida del menor y de su familia y, por otro, a promover medidas para su protección y para la preservación del entorno familiar, tal y como apunta el art.17 LOPJM. Por ello, esta herramienta, será imprescindible para el trabajo que deben desarrollar todas las Administraciones Públicas en la Comunidad de Madrid, al objeto de que todos orienten en el mismo sentido su intervención.

El instrumento Valora-Madrid de valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo es una herramienta técnica diseñada para ayudar a los/as profesionales de los Servicios Sociales en la identificación y valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección que pueden afectar a un niño, niña o adolescente en su familia. En este sentido, se debe entender como situaciones de desprotección aquellas en las que el niño sufre o está en riesgo de sufrir un daño significativo como consecuencia del comportamiento de su padre, madre o responsables legales. La valoración de la gravedad de la desprotección es una variable central en muchas tomas de decisión en de la Entidad Autonómica competente en el ramo (la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad) y los Servicios Sociales y no sólo es relevante en las fases iniciales de su intervención, sino que ha de monitorizarse permanentemente a lo largo del proceso de intervención.

Se ha constatado mediante estudios cuantitativos y cualitativos que disponer de una herramienta para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo incrementa el acuerdo entre profesionales, les aporta seguridad, contribuye a mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos profesionales de los Servicios Sociales y ayuda a agilizar la intervención y los procesos de toma de decisión. En último término, contribuye a mejorar la calidad de la intervención con los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y desprotección y sus familias.

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, recoge en su artículo 21 apartados 2.b, c y d que “Las medidas que se adopten irán dirigidas a procurar la atención e integración de los menores en todos los ámbitos de convivencia, favoreciendo su desarrollo personal y buscando el interés superior del menor. 3. Las líneas fundamentales de la actuación de los servicios sociales en esta etapa serán: (...) b) La detección de sus necesidades y la promoción de actuaciones integrales para favorecer su desarrollo físico, psíquico y social. c) La prevención de situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social de los menores de edad, y la intervención y seguimiento social en los casos indicados. d) La protección jurídica y social de los menores en situación de desamparo, procurando el mantenimiento del menor en el medio familiar y, en su caso, la aplicación de recursos alternativos cuando la convivencia familiar sea imposible o contraria al interés del menor.

En el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, se aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Estado hizo lo propio con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el caso de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, los proyectos se enmarcan dentro de la Política Palanca 8 (PP8), Componente 22: “Plan de choque para la economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas e Igualdad e Inclusión”. Dentro de este C22, la DGIFFN, ha presentado solicitud formal dentro del Proyecto Inversión P03 “Transformación tecnológica Servicios Sociales (LÍNEA C22.I2.P03)”, donde se enmarca este subproyecto.

Este contrato de servicios tiene por objeto proporcionar formación en la aplicación de la herramienta de valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección: Valora-Madrid” a los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales, y técnicos del Área de Protección del Menor de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

Madrid, a fecha de firma	<p>LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)</p> <p>LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD</p> <p>Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - ***6248** Fecha: 2025.03.25 20:19</p>
--------------------------	--